

Desplazados guatemaltecos, entre dos gobiernos indiferentes

(Isaín Mandujano y Rosa Santana, pág. 34-36)

Municipio De Candelaria, Campeche.- Desterrados de la comunidad de Laguna Larga, en la selva del Petén, cientos de guatemaltecos sobreviven desde hace más de 28 meses en condiciones precarias. Están en una franja fronteriza entre México y su país, que ellos consideran “territorio neutral” o “zona franca”, y exigen al gobierno guatemalteco el retorno a sus tierras o la reubicación para vivir dignamente. Dos líneas de chozas con techo de palma o tejas de lámina, paredes de varas o plástico y lonas, se extienden en ambos lados de la frontera. Originalmente llegaron huyendo del Ejército y la policía guatemaltecos unas 450 personas de origen campesino que conformaban 111 familias, pero sólo permanecen ahí 350 personas de 91 familias. Con temperaturas de hasta 40 grados, han soportado torrenciales aguaceros y el ataque permanente de los zancudos durante más de 28 meses. Procuran hacer vida comunitaria de manera provisional en 10 metros del lado mexicano y otro tanto del guatemalteco, dicen que para cruzar la frontera en sentido contrario hay peligro de que los amenacen o que la autoridad los persiga. Durante casi 30 años vivieron en Laguna Larga, comunidad enclavada en la Selva de El Petén, adonde se refugiaron de la guerra sucia de los ochenta. Todo cambió cuando les dijeron que ya no podían vivir ahí y que toda la selva era un área natural protegida de la Reserva de la Biosfera Maya, como lo decretó en 1990 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Al principio el cruce de los campesinos al territorio mexicano en busca de comida y medicinas alertó a la población de El Desengaño, que lo reportaron al Ejército, el **Instituto Nacional de Migración (INM)** y otras corporaciones federales, cuyo personal se percató de que en esos campamentos improvisados, en plena temporada de lluvias, cientos de personas imploraban ayuda. Según el informe de Voces Mesoamericanas, “este desalojo fue implementado bajo la permisividad del gobierno mexicano y organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes meses y semanas anteriores tuvieron conocimiento de la orden y operativo de desalojo”. Añaden que, a sabiendas de que más de 400 personas no tenían dónde refugiarse, las dejaron inermes mientras privilegiaban el enfoque de la seguridad nacional, el resguardo y “protección” de la frontera. Todo ello en franca inobservancia de los estándares internacionales en materia de poblaciones desplazadas y refugiadas, y sin entablar un diálogo internacional a fin de proteger preventivamente, y ahora durante la crisis humanitaria, a la comunidad.

Destierro

El pasado 20 de octubre el procurador de derechos humanos de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade, visitó por vez primera el campamento con el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Edgar Corzo Sosa, invitados por las organizaciones civiles Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala y la Red Todos los Derechos para Todos. Rodas Andrade y Corzo Sosa llegaron al campamento en un pequeño vehículo de redilas cuatro por cuatro, de suspensión alta y neumáticos anchos, debido a las pésimas condiciones del único camino que pueden usar los desplazados hacia México; del otro lado los esperan los soldados guatemaltecos. Ambos defensores de los derechos humanos recorrieron las champas o chozas, las letrinas y la galera acondicionada como escuela para más de 100 niños. Comprobaron que el agua de la laguna cercana no es apta para el consumo humano y las condiciones del pozo del que extraen el agua para beber. Al mismo tiempo, una brigada de médicos del Servicio y Desarrollo Comunitario, AC-Universidad Autónoma Metropolitana de Palenque, encabezados por Joel Heredia y Fulgencio Díaz, buscaban enfermos choza por choza, pesaban a los niños y atendían a embarazadas.

Edgar Pérez Archila y Rubén Domínguez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala; así como Fernando Ríos y Ángeles Hernández de la Red Todos los Derechos para Todos de México, ratificaron su acompañamiento a las familias. Tras la intervención de Rodas Andrade y Corzo Sosa, las mujeres, quienes fueron las primeras en ocupar sus lugares, reclamaron que el gobierno de Jimmy Morales los mantuvo en el abandono durante estos 28 meses y que el próximo enero entregará el poder al conservador Alejandro Giammatte.

No solicitarán refugio

Julián Zacarías García, otro desplazado de Laguna Larga, contó que el lugar más cercano para pedir ayuda, comida y medicinas, es la comunidad mexicana de El Desengaño, adonde ya solían emplearse como jornaleros en ranchos ganaderos y ejidos. Obdulio Rivera, dueño de uno de los vehículos todoterreno que permiten a los pobladores entrar y salir del campamento, dice que durante ocho años fue un soldado kaibil, adiestrado para matar sin piedad en tiempos de la guerrilla. Como a los otros militares, le vendieron la idea de que la guerrilla era mala, pero con el tiempo se dio cuenta de que la rebelión tenía causas concretas que él mismo está padeciendo: el gobierno por el que arriesgó su vida le ha dado la espalda, lo reprime y lo hace huir junto a su familia. Otros pobladores sirvieron como él en el ejército o bien fueron guerrilleros. Ahora los une la persecución y el despojo de que son objeto. Marvin Gonzalo Pérez Muralles, presidente del Comité Comunitario de Desarrollo (Cocodes), dice que a través del procurador de derechos humanos esperan presionar a Jimmy Morales, a quien por más de dos años le han pedido el retorno provisional a Laguna Larga “por razones humanitarias”

Aldo Ledón, de Voces Mesoamericanas, aclara que los desplazados no buscan obtener el estatus de refugiados en México, sino pretenden volver a su tierra, pero coincide en que Laguna Larga es la primera de decenas de comunidades enclavadas en la selva del Petén que el gobierno de su país quiere desalojar. Por otra parte, admite que muchos mexicanos rechazan todo lo que suene a migración y migrantes, pero además no han querido pedir refugio oficialmente porque eso implica renunciar de facto a un retorno por el que pugnan desde hace 28 meses, con la sola ayuda de organizaciones civiles como Servicio y Asesoría para la Paz (Serapaz), fundada por el obispo Samuel Ruiz García, que el 26 de octubre les llevó víveres.

La de la matanza, una zona de guerra de los cárteles

(Patricia Dávila, pág. 6-12)

El lugar donde el pasado lunes 4 fueron emboscados y asesinados niños y mujeres de las familias LeBarón y Langford está en una histórica zona de influencia de Rafael Caro Quintero. Actualmente, según reportes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Cártel de Sinaloa controla desde ahí el envío de enervantes a Phoenix, Arizona, a fin de distribuirlos en el mercado estadounidense.

Sí sabían

Un informe de inteligencia de la SSPC, cuya copia tiene Proceso, señala que el municipio de Agua Prieta ha sido controlado desde hace tiempo por un grupo delictivo comúnmente conocido como Los Paredes o Cártel de los Pesados de Apson, afín a Los Salazar. Éstos operan para Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Aureliano Guzmán Loera, hermano del Chapo, y para los hijos de éste: Iván y Alfredo Guzmán Salazar, así como para Joaquín y Ovidio Guzmán López.

Los cárteles y sus satélites

En los dos estados está documentada la presencia de dos grandes organizaciones: La Línea o Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa. En torno a ellas se mueven otras bandas, una especie de satélites que eventualmente cambian de bando o tratan de ser independientes, señalan fuentes de seguridad de ambos estados consultadas por Proceso. Por ejemplo, entre los municipios de Juárez y Chihuahua operan Los Aztecas y un grupo denominado Los Lince, los sicarios más experimentados de La Línea. Mucho tiempo Los Aztecas se mantuvieron en el entorno del Cártel de Juárez, pero en febrero y marzo de 2018 tuvieron diferencias internas: se confrontaron dos grupos identificados como Los Aztecas Viejos y Los Aztecas Nuevos. Esta escisión fue evidente para autoridades locales de ambos estados porque hubo un pico en la incidencia delictiva: tuvieron muchas bajas entre ellos y otros fueron detenidos. Al darse cuenta de que se estaban debilitando pactaron una tregua, pero ya no están juntos. Los Aztecas

Jóvenes formaron La Empresa y siguen del lado de La Línea, mientras que Los Aztecas Viejos trabajan solos.

LeBarón: ante la apatía de la sociedad, estamos tocando fondo

(José Gil Olmos, pág. 13-17)

A casi un siglo de su fundación, la comunidad mormona mexicana-estadunidense LeBarón no había vivido un hecho tan sangriento como el del pasado lunes 4, cuando en el camino serrano que comunica Chihuahua con Sonora fueron acribilladas tres camionetas donde viajaban familias del clan, con un saldo de nueve muertos, seis de ellos niños. La masacre volvió a cimbrar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que de inmediato envió a los secretarios de Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Defensa Nacional a indagar quiénes fueron los responsables. “Reaccionan tarde y vienen a tapar el pozo cuando ya mataron a toda la familia”, dice Julián LeBarón, quien en 2011 participó en las caravanas que realizó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, recorriendo todo el país y una parte de Estados Unidos a fin de hacer visibles a miles de muertos y desaparecidos, víctimas de la guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón.

No hicieron caso

Desde que su formó en 1924, la colonia mormona con nacionalidad mexicana y estadunidense ha padecido violencia por cuestiones agrarias y religiosas. Pero estos problemas no habían segado vidas hasta que llegó el crimen organizado al pueblo de Galeana, Chihuahua, donde tienen sus tierras. “Ya tocamos fondo”, sostiene en entrevista Julián LeBarón, y advierte que el gobierno federal poco puede hacer, porque las instituciones con las que cuenta para detener la violencia del crimen organizado están desgastadas.

Uso político de la tragedia

Antes de este ataque la comunidad sufrió otras agresiones de grupos criminales. En 2009 fue secuestrado Erick LeBarón, de 17 años, y se exigía 1 millón de dólares por su liberación. La comunidad LeBarón rechazó pagar y denunció en medios nacionales e internacionales el plagio. Finalmente lograron la liberación de Erick, pero meses después Benjamín, hermano de Erick y de Julián, así como Luis Widmar Stubbs, otro integrante de la comunidad, fueron secuestrados y asesinados. A partir de entonces la comunidad decidió integrar un grupo de autodefensa y en 2011 Julián LeBarón se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por Javier Sicilia, exigiendo un alto a la violencia generada por la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón y que después mantuvo Enrique Peña Nieto.

Esperanza, a pesar de todo

Un par de días después del asesinato de sus familiares, Julián LeBarón precisa que sólo en Chihuahua tenían protección del gobierno, y no en Sonora. – ¿De la Guardia Nacional?—No, pero ahorita sí llegaron muchos con los secretarios de Relaciones Exteriores y de Seguridad. Sólo aparecen cuando hay una tragedia y no previenen nada. Una vez más se le inquiere si sirvieron de algo las voces como la suya, la de Javier Sicilia y las de miles de familiares de muertos y desaparecidos, que hace años exigieron detener la guerra militarizada contra el crimen organizado y demandaron paz y justicia para los familiares de las víctimas. “Sí han servido, hay tantas víctimas y tanto dolor que estamos tocando fondo. Yo creo que de ese dolor va a salir una fuerza increíble para enfrentar este problema”, contesta. –Tienes una esperanza, a pesar de todo...—No solamente tengo una esperanza, casi siento una certeza de que así va a ser porque en México somos fuertes como familia y de ahí surge la fuerza de todos los países chingones. – Ustedes, como familia, ¿qué van a hacer?—No nos vamos a ir de México, vamos a encontrar a los responsables de este crimen y queremos sentar un precedente para que se pueda hacer lo mismo en los casos donde suceden los crímenes

Asesinato de niños, nueva táctica de los cárteles para sembrar el terror

(José Raúl Linares, p. 20-22)

Durante los 10 primeros meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados 796 niños y adolescentes. La cifra representa que cada seis u ocho horas en promedio –según diversas fuentes– se comete el homicidio de un menor de edad. Esos números convierten a México en el quinto país más peligroso para la infancia, superando a naciones como Irak o Siria que durante años han sufrido conflictos bélicos declarados. Según especialistas consultados por Proceso, así como análisis estadísticos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, la reciente matanza de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón en Sonora es reflejo de una conducta violenta constante, cuya creciente espiral de muerte y terror comenzó en 2017. Sólo en lo que va de la administración de López Obrador se han reportado entre tres y cuatro asesinatos y cuatro desapariciones diarias.

Tierra de infanticidio

Giusti y Pérez García coinciden en que el país padece una epidemia de homicidios en el gobierno del presidente López Obrador: 30 mil casos, según datos oficiales, un patrón de crueldad que alcanza a niños y adolescentes. El 19 de abril, en Minatitlán, Veracruz, un grupo armado desafió la promesa presidencial de que se pondría fin a la violencia. En el cumpleaños de una transgénero, un comando abrió fuego contra los asistentes y asesinó a 13 personas. Entre las víctimas estaba un recién nacido. “Al bebé lo remataron”, relató uno de los sobrevivientes. Siete días después el mandatario visitó la comunidad y se comprometió a que la Guardia Nacional, un órgano de seguridad que entonces no entraba en funciones, iniciaría sus operativos en la comunidad que estremeció al país durante semanas. Pero la

espiral de violencia continuó, incluso en el estado donde nació el presidente: el 21 de abril, hombres armados asesinaron a dos mujeres en Tabasco; las víctimas viajaban en una camioneta en la que fueron encontrados dos menores de edad heridos, un niño de 10 años y un recién nacido de ocho meses.

Víctimas y victimarios

Pérez García explica otra arista de la violencia contra los menores de edad: “Lo que también está ocurriendo es que muchos adolescentes asesinados en realidad son víctimas del reclutamiento forzado que realizan los grupos de la delincuencia organizada”. Recuerda el caso de niños sicarios como El Ponchis, capturado en 2010 y liberado tres años después, y Juanito Pistolas, asesinado este año. “La prevalencia de la violencia contra los niños es preocupante en los diferentes entornos, y hay diferentes factores que la determinan. Uno, por ejemplo, es el tema de la aceptación de la violencia”, reflexiona Giusti. “Los escenarios de violencia entre los adultos terminan por contaminar los espacios de los niños”

“AMLO no ha cumplido”

Dejando de lado los homicidios y matanzas, los menores de edad en México también son presa de la violencia familiar, escolar y del barrio, señala la oficina de la Unicef México. “Generalmente, los niños son más vulnerables a la violencia en los entornos que son más cercanos a ellos”, dice Giusti. La Unicef alerta que corren mayores riesgos quienes se encuentran más vulnerables por situaciones de abandono o negligencia, marginación, discapacidad, migración, desplazamiento forzado o en contextos de violencia armada. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su reciente informe Niñas adolescentes: víctimas del crimen organizado en México, reconoció que en nuestro país no existe suficiente claridad legal para hacer frente a la violencia del crimen organizado y otras de “carácter estructural”, como la pobreza y la desigualdad, la normalización de la violencia en el ámbito educativo, la militarización de la seguridad pública e, incluso, la exposición de los padres a entornos violentos. Entre 2012 y 2017, por ejemplo, fueron asesinados casi 2 mil 600 menores de 15 años; 42% de ellos, a manos de algún familiar, en sus hogares o por maltrato, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y una investigación de la revista Emeequis, firmada por la re-portera Alejandra Crail